

**Doctor Oscar Silva Montoya CONAGOPARE NAPO**  
**LA NUEVA RURALIDAD EN EL NAPO UN ENFOQUE DESDE EL**  
**REGIMEN DE COMPETENCIAS**

En un voluminoso estudio multisectorial sobre Ecuador auspiciado por el Banco Mundial y significativamente titulado *An Economic and Social Agenda in The New Millennium*, María Donoso-Clark define los tres objetivos estratégicos a perseguir en el ámbito del desarrollo rural: la cohesión económica y social de los espacios locales, el ajuste de la agricultura frente a los desafíos de la desregularización de los mercados – vía diversificación de las actividades económicas en las áreas campesinas, por ejemplo – y la protección del entorno.

Es en la primera de esas líneas donde esta analista ubica y justifica la prórroga por lo que representa desde el punto de vista de la cooperación intercultural y de la consolidación de alianzas estratégicas capaces de promover el desarrollo local y facilitar su articulación regional más específicamente, su componente de sub proyectos – aparece así como la punta de lanza exitosa de una nueva forma de abordar la ruralidad por medio del fortalecimiento de las estructuras organizativas – el capital social cristalizado en las OSG – resultantes de la también nueva coyuntura a la que se enfrentan las áreas rurales en la era de la globalización.

En este apartado, a tenor de la información cuantitativa precedente, queremos sugerir una serie de líneas de reflexión sobre lo poco de cierto y lo mucho de retórico que hay en todo ello.

En un contexto general en el que, por décadas, la etnicidad ha desempeñado un papel clave en la lucha de los sectores subalternos de la sociedad rural por el control de recursos fundamentales para su supervivencia y de espacios de representación pública.

La reacción del aparato del desarrollo ante la emergencia de este fenómeno ha sido, como venimos argumentando, la de impulsar paradigmas de intervención que, con el capital social a la cabeza, forman parte de una estrategia aparentemente respetuosa con las demandas étnicas, sobre todo con las compatibles con la vía proyectista.

Tras ella subyace, sin embargo, una nueva institucionalidad que incluye la descentralización de los servicios y los poderes – en consonancia con los gobiernos locales y las ONG – afín a la ideología anti-estatalita del neoliberalismo.

Considérese si no el significado profundo de esta iniciativa, la más emblemática en desarrollo comunitario en el medio indígena ecuatoriano, diseñada en sus líneas esenciales desde el Banco Mundial, coordinada por destacados representantes de la intelectualidad indígena – razón por la que su control ha constituido un campo de competencia entre las grandes organizaciones étnicas nacionales y entre éstas y la Presidencia de la República.

Hay que considerar por otra parte que los GADs hace tiempo que se han convertido en un gran reclamo para el aparato del desarrollo.

Durante el último cuarto de siglo, las inversiones realizadas en las zonas rurales han tendido a concentrarse más en función de la presencia de contingentes importantes de población – capacitando de paso a unas elites locales cada vez más preparadas para moverse en ese escenario fraccionado y privatizado del desarrollo rural.

En este sentido, no debe sorprender que se haya coadyuvado a retroalimentar los procesos de redefinición de las identidades colectivas impulsados por las dirigencias con una dimensión político-reivindicativa.

Atendiendo a estas consideraciones, parece apropiado concluir que estamos ante un modelo caracterizado por la fragmentación.

Fragmentación de los enfoques y de las iniciativas (los centenares de intervenciones heterogéneas impulsadas), y fragmentación también de carácter étnico.

El enfoque territorial del desarrollo rural está todavía lejos de constituir un nuevo paradigma o una nueva teoría para la acción en el espacio rural, sin perjuicio de lo cual los diversos intentos de re conceptualización del desarrollo rural tienen tres elementos importantes en común: 1) la consideración de que lo rural va más allá de lo agrícola; 2) el reconocimiento de la centralidad de los recursos naturales; y 3) el papel clave de los vínculos urbano-rurales en la constitución del territorio rural.

La forma de ocupación de la Amazonía ha consolidado un territorio eminentemente multicultural, por lo cual es rol del estado en sus diferentes niveles, generar procesos inclusivos de actores diversos en la gestión del bosque, y esto será posible en la medida que se generen espacios de concertación donde se valore los roles de cada tipo de actor, y se definan políticas interculturales en torno al bosque y sus recursos naturales.

